



que si todos necesitan que les ayuden y no hay personal, pues no dan abasto».

«Han subido los gastos de personal, los costes de alimentación y los energéticos... lógicamente todo esto tiene que repercutir de alguna manera», señala Cinta Pascual, presidenta del Círculo Empresarial de Atención a las Personas (Ceaps). Coincide con ella Ignacio Fernández-Cid, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), que afirma que los precios están controlados y regulados. «A principios de año tenemos la obligación de comunicar a las consejerías de Consumo de

cada comunidad los precios que vamos a tener», dice. Además, ese incremento se limita al índice de precios de consumo (IPC) salvo que se cometan otras mejoras que justifiquen esa subida.

Subir los precios, dice, es la única manera de seguir ofertando el servicio, especialmente con la entrada en vigor del nuevo acuerdo sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales. «Supone incrementos de ratios de personal con el que también sube el coste de

#### Un anciano alojado en una residencia de mayores de las Islas Baleares // EP

personal», afirma. Además, en los próximos años las tarifas seguirán subiendo. «Tendremos que reajustar nuestros precios clarísimamente porque actualmente no es sostenible. Si se apuesta por un sistema de mayor calidad y más dotación de personal hay que entender que estos gastos se deberán tener en cuenta», avisa.

También José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, cree que el coste unitario de la plaza residencial deberá subir en base

### Los familiares de los usuarios lamentan que el incremento en el precio no repercuta en la mejora de la calidad de los servicios

a este nuevo modelo, por el que se promueven las habitaciones individuales respecto a las compartidas o se fomentan los grupos reducidos de convivencia con mayores ratios de personal. «Va a haber que incrementar el presupuesto de las plazas residenciales y sobre todo promover un incremento de la prestación vinculada al servicio», reclama. Esta ayuda actualmente es de 513 euros mensuales de media, el resto lo aporta el anciano.

«Si queremos prestigiar y dar un servicio de calidad tenemos que pensar que no podemos pagar unos sueldos no decorosos. El Gobierno, las comunidades y los ayuntamientos deben hacer una inversión en las residencias para poder garantizar las atenciones que se merecen y esto lleva a que hay que incrementar el coste por plaza a más de 2.300 euros porque si no es imposible dar una atención de calidad», remarca Ramírez.

#### Lejos de la familia

Pese a los precios, las residencias privadas se siguen llenando. Además del tiempo de espera para conseguir una plaza pública, la ubicación de los centros suele ser otro de los motivos que llevan a los familiares de los mayores a apostar por los privados. María asegura que todas las residencias públicas están lejos de su casa. «No quiero separar mi corazón del de mi madre. Estoy cerca de esa residencia y no tengo coche, así que mientras pueda voy a seguir a su lado», dice.

Precisamente en el entorno de las residencias ve un problema Ramírez. Cree que uno de los principales criterios a la hora de construirlas debería ser la proximidad de las personas que las necesitan. «Generalmente en España donde faltan residencias es en capitales de provincia y núcleos residenciales. No sirve de nada que te den una plaza a 100 km de casa si no puedes ver a tus familiares», critica.

#### FALTAN 76.350 PLAZAS

## Acceder a una plaza pública cuesta hasta tres años en algunas regiones

E. CALVO MADRID

Seis de cada diez plazas de residencias de mayores, en concreto el 62,7 por ciento, son de financiación pública, es decir, son plazas en centros públicos, concertadas en centros privados o plazas que se pagan a través de la prestación destinada a este fin. Sin embargo, el tiempo de espera para acceder a ellas es de 344 días de media, explica José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes

en Servicios Sociales. «Tenemos constancia de que en el caso de las plazas de residencias en algunas comunidades supera el doble, es decir, más de 3 años, especialmente para los grandes dependientes», lamenta.

Según los cálculos de la asociación, España necesitaría a día de hoy 35.000 plazas más para atender la demanda actual de los grandes dependientes. «Lo que vemos en el sufrimiento de la gente más vulnerable que solicita la plaza

en la residencia y muere sin recibir esa plaza, con menor calidad de vida, menor dignidad y desde luego sin haber recibido un derecho», sostiene. Porque insiste en que las plazas públicas para estos mayores dependientes no son una ayuda, sino un derecho.

Al finalizar 2021, recogen los mismos datos, había en España 397.443 plazas residenciales para personas mayores, un 2 por ciento más que el año anterior. Sin embargo, los cálculos de la asociación constatan que hay un claro déficit, de manera que serían necesarias 76.350 más para cumplir con la ratio de referencia, de 5 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años.

«Y hay otro problema de desigualdad en cuanto a plazas residenciales»,

continúa Ramírez. Explica que algunas comunidades como Castilla y León o Castilla-La Mancha tienen una ratio muy alta de plazas, mientras que en el otro extremo hay otras como Canarias, «con el porcentaje más bajo de plazas residenciales para personas que precisan esa residencia». En algunos casos, además, «los porcentajes están invertidos», de manera que las plazas privadas superan con creces a las públicas o concertadas. Según los datos de la asociación, las comunidades con mayor déficit son Andalucía y la Comunidad Valenciana, en las que faltan 31.475 y 23.485 plazas respectivamente. En cinco regiones, sin embargo, hay exceso de plazas, como en Castilla y León, donde sobran 17.503.